

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

I.- En cuanto a la apelación rol 13.377-2019

VISTOS:

Por compartir los argumentos del tribunal de primera instancia, **se confirma** la resolución apelada de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, escrita a fojas 60 de la causa C-23147-2018 del 11° Juzgado Civil de Santiago.

Devuélvase.

II.- En cuanto a la apelación acumulada rol 11.411-2020

VISTOS:

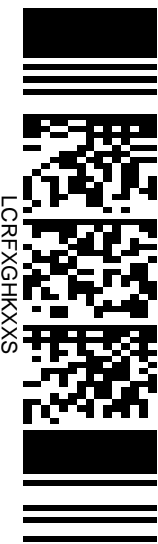
Se elimina el fundamento décimo y, teniendo además presente:

PRIMERO: Que, la parte demandante Agrícola Esmeralda S.A. en su demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. por daño emergente y lucro cesante, acepta que, respecto de este juicio y de uno anterior sustanciado ante el 1° Juzgado Civil de Melipilla, existe identidad de partes y de causa de pedir, pero discrepa en cuanto a la concurrencia de una identidad del objeto pedido.

Entonces, y para precisar, son hechos pacíficos los siguientes:

a) Agrícola Esmeralda S.A. demandó a CGE ante el 1° Juzgado Civil de Melipilla de indemnización de perjuicios, sustanciándose la causa C-2353-2011, fundada en la responsabilidad de la demandada en un incendio ocurrido el 13 de febrero de 2011 en una línea de transmisión eléctrica de alta tensión ubicada en el predio de la actora.

b) Por sentencia judicial ejecutoriada se acogió la demanda y se ordenó a la demandada a pagar una indemnización por daño emergente causado por el incendio, consistente en la pérdida de eucaliptus y bosque nativo, cercos, reparación de sistema de riegos, contratación de recursos humanos para el control del incendio, contratación de maquinaria para la remoción de escombros y



replantación de 30 hectáreas de paltas que resultaron destruidas. También se ordenó la indemnización por lucro cesante por la pérdida de producción de paltas que no pudieron ser vendidas por los años 2011, 2012 y 2013.

SEGUNDO: Que, la demandada, como se ha visto, se defendió oponiendo la excepción de cosa juzgada, porque entiende que concurre la triple identidad que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que rebate la demandante, pues considera que no existe identidad de objeto pedido.

Así, la actora según grafica en el escrito de apelación, para diferenciar el objeto pedido entre ambos juicios indica que, en el primero demandó daño emergente por la suma de \$ 2.507.580.000 que corresponde a 600 hectáreas de bosque nativo y 400 hectáreas de eucaliptus; 40 hectáreas de paltos; cercos del terreno, riego de 16 hectáreas de paltos; contratación de recursos humanos para control incendio y retiro de escombros. En cambio, ahora, demanda daño emergente por la suma de \$321.312.420 correspondiente al plan de reposición de 25 hectáreas de plantaciones dañadas. A su vez, en el primer pleito demandó lucro cesante por \$2.330.000.000 por la pérdida de producción de paltas para las cosechas de los años 2011, 2012 y 2013 y daño moral por \$400.000.000. En el juicio actual, demanda lucro cesante por UF69.381 correspondiente a la pérdida de producción de paltas para las temporadas 2014 a 2018, y hace reserva del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil por la pérdida de producción de paltas para las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, en subsidio, la suma de UF105.590.

TERCERO: Que, como se sabe, el fundamento último de la cosa juzgada es el principio *non bis in ídem*, conforme al cual descansa la prohibición de doble juzgamiento. Para Jordi Nieva al hablar sobre la base de la cosa juzgada nos dice que “(...) *No otra cosa que una prohibición de reiteración de juicios es la cosa juzgada formal, que prohíbe al mismo juez que juzgó modificar su propio juicio. Y también es una prohibición de reiteración de juicios la cosa juzgada material, que prohíbe a cualquier otro juez distinto de quien emitió el juicio, juzgar de nuevo sobre la misma causa, en todo (cosa juzgada material negativa) o en parte (cosa juzgada material positiva). La invariabilidad y la inmutabilidad sólo pretenden eso*



mismo: que no se vuelva a repetir un juicio ya dictado, modificándolo. La firmeza es sinónimo de cosa juzgada formal. Y la irrevocabilidad sólo expresa nuevamente la misma idea: que está prohibido que un mismo juicio se repita”.

Enseguida, el mismo autor, frente a la pregunta de por qué no queremos que un juicio se repita, responde *“para que no sea inútil. Para que los juicios jurisdiccionales no se contradigan entre sí, o no se perpetúen eternamente, poniendo en entredicho la seriedad de todo el sistema judicial”*, agrega después *“(…) para dar fijeza a los juicios ya emitidos y, como consecuencia, seguridad jurídica al sistema jurídico-social”*. “Nieva Fenoll Jordi, La Cosa Juzgada El fin de un Mito Legal Publishing Chile, 2010 pág 33).

CUARTO: Que, como se adelantó, la discusión versa sobre la identidad de objeto pedido. Respecto del alcance de éste, la doctrina nos dice *“por objeto no debe entenderse la cosa material sobre la que recae el derecho real, o la prestación a que se refiere el derecho de obligación, sino el intento final que las partes tuvieron al proponer sus demandas por vía de acción o excepción, en otros términos, lo que fue materia de la discusión y de la decisión”* (Nicolás Coviello); también se nos dice *“el objeto es la cosa que se pide, pero no en sentido corporal, sino en el de la utilidad o ventaja que con ella se pretende”* (Alsina) (Ambas citas efectuadas por Hugo Pereira Anabalón en “La Cosa Juzgada en el Proceso Civil, segunda edición página 76).

La profesora Patricia Lorca Riofrío, a la luz del estudios de una sentencia de la Corte Suprema nos dice que *“(…) para el análisis del objeto jurídico de una pretensión debemos diferenciar entre el objeto material, que en la especie en ambos procesos es una suma determinada de dinero, y el objeto jurídico, es decir a lo pedido por la parte al deducir la acción…”* (Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez Número I:2004 La Cosa Juzgada pág 195).

La jurisprudencia, por su parte, define el objeto como *“el beneficio jurídico inmediato que se reclama y al cual se pretende tener derecho y no la cosa material o la prestación misma”* (sentencia Corte Suprema citada en la misma obra del profesor Pereira).



QUINTO: Que, así, es posible convenir que el objeto está íntimamente ligado a la pretensión del demandante, en otras palabras, responde a desentrañar la interrogante sobre lo que busca el actor con su demanda y, la respuesta a ello, según lo que hemos visto es de orden jurídico como material.

En el caso planteado, el objeto, en su dimensión de beneficio jurídico, consiste en la indemnización de daño emergente y de lucro cesante, y en su dimensión material es la suma de \$321.312.420 por la reposición de 25 hectáreas de plantaciones dañadas (daño emergente) y UF 69.381 por la pérdida de producción de paltas para las temporadas 2014 a 2018, con reserva para las temporadas siguientes hasta el año 2023, o una suma de UF 105.590 de forma subsidiaria (lucro cesante).

De lo expuesto, no cabe duda qué, el beneficio jurídico que se persigue es idéntico en ambos pleitos –daño emergente y lucro cesante- variando solo su contenido material.

SEXTO: Pues bien, la diferencia material que ha hecho la parte demandante en su libelo no es suficiente para soslayar la fuerza de la cosa juzgada, y no lo es, porque bajo esa premisa es muy fácil hacer cualquier variación en el orden material para evadir la prohibición de doble juzgamiento, dejando así de lado las finalidades de certeza jurídica en las relaciones que las partes someten a la decisión jurisdiccional, contrariando también principios de economía procesal y de preclusión. En efecto, las partes ya sometieron a conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia la pretensión indemnizatoria por daño emergente y lucro cesante que la demandada con su actuar provocó en el predio y plantaciones de la primera, y si en ese juicio no se extendió la pretensión indemnizatoria a los límites que ahora se quiere abarcar, denota un comportamiento contrario a sus actos propios, que el sistema jurídico desecha. Aceptar lo contrario conduce además a perpetuar eternamente las controversias jurídicas, tal como señala el profesor Nieva ya citado.

SÉPTIMO: Que, la demandante intenta demostrar la plausibilidad de su acción mediante un ejemplo que narra en el libelo de apelación, y acude a la hipótesis de un primer juicio por terminación de contrato de arrendamiento por no



pago de rentas de un determinado período cuya acción es desestimada, por falta de pruebas; entonces se pregunta si ¿no podría nuevamente intentarse la demanda por no pago de rentas de un período posterior?, auto-respondiéndose en forma afirmativa, y sosteniendo que en ambos casos hay pretensión de pago que constituye lucro cesante y en que no podría acogerse la cosa juzgada.

Sin embargo, el ejemplo no constituye un argumento que permita acoger su planteamiento, pues en ese caso se está ante una responsabilidad contractual derivada de un contrato de tracto sucesivo, es decir, donde la prestación se agota con el cumplimiento y vuelve a renacer y por ello el nuevo juicio que se propone tiene asidero en estas obligaciones que van naciendo en forma sucesiva, cuestión distinta a este juicio de naturaleza extracontractual derivada de un único hecho cual es el incendio ocurrido en el año 2011. Similar situación al ejemplo es lo que ocurre con las obligaciones alimenticias, pues su naturaleza es distinta y la prolongación de la obligación es evidente.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, se concuerda con el tribunal de primera instancia en cuanto a que concurre aquí la triple identidad que exige la cosa juzgada para ser acogida e impedir de este modo el doble juicio.

NOVENO: Que, los antecedentes probatorios acompañados en segunda instancia no permiten variar lo decidido, pues, en cuanto al peritaje está orientado a determinar la existencia y monto de los perjuicios demandados, más dicho análisis queda excluido al operar la cosa juzgada.

DÉCIMO: Finalmente, en cuanto a las razones que expone el demandante como justificación del nuevo juicio, ello no derriba la fuerza de la cosa juzgada, tampoco puede serlo la crítica que hace a la demora del primer juicio por el ejercicio de derechos procesales pues, la doble instancia, como la posibilidad de casación ante la Corte Suprema, son garantías del debido proceso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma la sentencia apelada** de diecisiete de julio de dos mil veinte dictada en los autos C-23147-2018 del 11° Juzgado Civil de Santiago.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.



Regístrese y en su oportunidad devuélvase.

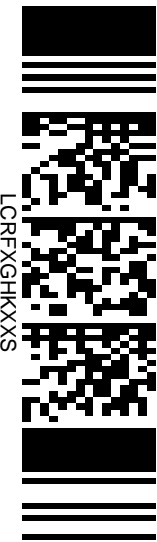
Rol N° 13377-2019 (acumulada 11.411-2020)

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la ministra (S) señora Merino, por ausencia.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia López M. y Abogado Integrante Jorge Gomez O. Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>